

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos N° 119.779-2020, se ha conocido el recurso de queja entablado por el Defensor Penal Público don Eduardo Meins Middleton, en causa por el delito de hurto simple, RUC 1.700.493.567-5, RIT 3.314-2017, seguida ante el Juzgado de Garantía de Talca, en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, en razón de las faltas o abusos en que incurrieron al decidir el recurso de apelación, interpuesto en favor del imputado Sebastián Ignacio Méndez Caro, confirmando la resolución de primer grado que revocó la pena sustitutiva de remisión condicional y dispuso el cumplimiento efectivo de la condena.

Los jueces recurridos informan que el arbitrio debe ser rechazado, pues razonaron fundadamente acerca de las motivaciones fácticas y jurídicas por las cuales resolvieron del modo que se les reprocha.

Por decreto de 20 de octubre de 2020 se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, el articulista sustenta la falta o abuso grave en la sentencia que impugna en la falta de fundamentación de la resolución pronunciada por los recurridos. Expone que, el imputado fue condenado el 3 de diciembre de 2018 a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa de seis unidades tributarias mensuales, como autor del delito consumado de hurto simple, sustituyéndose la pena por la de remisión condicional.



Luego de haberse discutido eventuales incumplimientos, —a través de las resoluciones que precisa— el 25 de junio de 2020 principió a cumplir la pena sustitutiva, sin embargo Gendarmería informó que no se presentó al control correspondiente al mes de julio de ese año. El 18 de agosto, estando sujeto a prisión preventiva en causa diversa, justificó su inasistencia al control anotado dada la medida cautelar personal que pesaba en su contra en una causa diversa, no obstante lo cual el tribunal decidió revocar la pena sustitutiva, decisión que fue apelada y confirmada por los recurridos, sin hacerse cargo de las alegaciones vertidas ni entregar fundamentación de su resolución.

Afirma que, la falta o abuso grave, que por el presente recurso se alega, se produce al momento en que la Corte de Apelaciones de Talca confirmó la resolución apelada sin entregar una debida argumentación de su resolución, no dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, por lo que pide se deje sin efecto la resolución recurrida, reponiéndose el procedimiento al estado que una sala no inhabilitada del tribunal de alzada, conozca y falle el recurso de apelación deducido por la defensa, sin perjuicio de las medidas que esta Corte considere adecuadas y necesarias para poner pronto remedio al mal denunciado y de aplicar las medidas disciplinarias que se estimen pertinentes.

Segundo: Que, al informar, los recurridos expusieron que cuando el tribunal de alzada confirma una sentencia definitiva *a quo* y esta, a su vez, reúne todas las menciones exigidas por el legislador, basta con esa declaración, por cuanto se entiende que hace suyos la fundamentación entregada por el de mérito. Siendo así y con el objeto que exista la debida concordancia normativa, en el caso



de las sentencias interlocutorias, la inexigibilidad de contener los argumentos de lo decidido, al decidir su confirmación, sin alterar la que es objeto de revisión, surge de forma prístina, ya que las expresiones que utiliza el legislador permiten sostener que, incluso aquellas que revocan o modifican las de la instancia deben dar cumplimiento a las menciones de los numerales 4° y 5° del artículo 170, solo *“...en cuanto la naturaleza del negocio lo permita ...”*.

Agregan que, estimaron que la decisión del Juzgado de Garantía de Talca que decretó la revocación de la sustitutiva, por los incumplimientos que se habían verificado, se encontraba suficientemente fundada, coincidiendo —además— de manera íntegra con lo que se planteaba y por ello decidieron su confirmación, lo cual no se contradice con lo prescrito en el artículo 36 del código adjetivo y, aún más, guarda armonía con las disposiciones antes referidas, desde que la exigencia de cimentar lo resuelto ya se encontraba en la resolución del Juzgado de Garantía, objeto de la revisión efectuada, compartiendo sus fundamentos y, por lo mismo, sin que se estimara necesario modificarlos de forma alguna, emitiendo su veredicto confirmatorio del modo que se dispone expresamente por la normativa aplicable a consecuencia de la remisión que se hace en el compendio adjetivo criminal.

Tercero: Que, en lo concerniente a la materia del recurso, el artículo 27 de la Ley 18.216 establece que las penas sustitutivas reguladas en esta ley siempre se considerarán quebrantadas por el solo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme.



Dentro de las reglas para determinar las consecuencias que se impondrán en caso de incumplimiento del régimen de ejecución de las penas sustitutivas, contenidas en el artículo 25 de la ley precitada, el legislador en su numeral 1º trata sobre el incumplimiento grave o reiterado de las condiciones impuestas, en tanto que el ordinal 2º versa, genéricamente, respecto de otros incumplimiento injustificados.

Cuarto: Que, en base a lo expuesto en los motivos previos, aparece que la inasistencia al control de la remisión condicional, correspondiente al mes de julio de 2020 se verificó por la imposibilidad material, por parte de Méndez Caro, dado el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra, en la causa RIT 2.523-2020 del Juzgado de Garantía de Linares, a contar del 4 de julio de 2020, la cual se ha extendido ininterrumpidamente hasta la fecha, de forma tal que el anotado incumplimiento no tiene la atribución de ser grave, reiterado ni injustificado, pues el mismo obedeció a la decisión de otro tribunal, y no a la voluntad del penado, quien se encuentra privado de libertad.

Quinto: Que, la revocación de las penas sustitutivas que trata el artículo 27 de la Ley 18.216, coherentemente con la presunción de inocencia que inspira toda la legislación procesal penal, establece como requisito no solo la comisión de un nuevo crimen o simple delito, sino que además que dicha circunstancia sea establecida a través de una sentencia firme, cuyo no es el caso puesto que, hasta la fecha, en la causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Linares, no se ha dictado sentencia condenatoria alguna.

Sexto: Que, entonces, la resolución que por esta vía se impugna carece de la fundamentación suficiente para superar el yerro anotado por parte del



sentenciador *a quo*, el cual al revocar la pena sustitutiva de remisión condicional y disponer el cumplimiento efectivo estableció que Méndez Caro se encontraba “... *en prisión preventiva en causa diversa, si se encuentra en prisión preventiva es porque se encuentran acreditados los delitos por el cual se formalizó. Entonces esto hace concluir al Tribunal que existe un Quebrantamiento grave de la condena...*” (sic). Al confirmarse pura y simplemente dicha resolución, el tribunal *ad quem* hizo suyos todos los defectos anotados en la resolución de primer grado, de forma tal que, para mantenerla debió esgrimir argumentos que, fuera de corregir tales errores, permitiesen confirmar la decisión, lo que no ocurrió en la especie, incurriendo por ello en la falta o abuso grave denunciado, que deberá ser enmendado según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de tribunales, **se acoge** el recurso de queja presentado por el Defensor Penal Público don Eduardo Meins Middleton, en representación del sentenciado Sebastián Ignacio Méndez Caro y, por ende, **se deja sin efecto** la resolución dictada en audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte, por el Juzgado de Garantía de Talca, en los antecedentes RUC 1.700.493.567-5, RIT 3.314-2017, en cuanto por ella se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena impuesta y, en su lugar se decide que **se mantiene** la remisión condicional dispuesta, cuyo control deberá proseguir una vez que cese, a su respecto, la prisión preventiva que cumple en la causa RIT 2.523-2020 del Juzgado de Garantía de Linares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 18.216.



Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Brito, quien fue del parecer de rechazar el recurso de queja, teniendo para ello en consideración que la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca, contrastada con las argumentaciones del quejoso, claramente representa una legítima diferencia interpretativa de las normas aplicables en la especie a cuyo respecto es posible sostener soluciones diversas, por lo que ello no puede, según constante jurisprudencia, constituir una falta o abuso grave que amerite la interposición de un recurso de la naturaleza de que se trata y que, por lo mismo, contempla la aplicación de medidas disciplinarias, reservadas para infracciones de especial entidad.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno de este Tribunal por estimar que no existe mérito suficiente para ello.

Comuníquese por la vía más expedita esta resolución a los recurridos y a los Juzgados de Garantía de Talca y Linares.

Regístrese y archívese.

Nº 119.779-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos en comisión de servicios.





En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

